

El acelerado programa participativo del proceso constituyente chileno de 2022

Nicolás Tobar Jorquera*

RESUMEN

La política chilena está en una nueva encrucijada, después de haberse rechazado en dos ocasiones la propuesta de nueva Constitución escrita mediante mecanismos democráticos. Se ha hecho necesario encontrar explicaciones y alternativas al asunto. Los recientes aportes de las teorías de la aceleración social demuestran que la confección de constituciones en contextos democráticos son artefactos lentos, que tienden a desincronizarse de la alta velocidad que demuestra el ritmo de cambio social contemporáneo. Para aproximarse empíricamente a esta condición, en el caso chileno se empleó un análisis documental de archivos digitales de la convención constitucional relacionados con la conformación e implementación del programa de participación deliberativa del proceso. Los resultados indican que el plazo impuesto de 12 meses, y el diseño de un programa de participación maximalista, acabaron por someter las deliberaciones ciudadanas y entre representantes a un ritmo frenético, lo que hizo incompatible el surgimiento de diálogos masivos y reflexivos necesarios para nutrir de legitimidad el proceso. En consecuencia, se sugiere a la política navegar alternativas de larga duración que logren respetar la lentitud de toda formación de un proyecto de país mediante una carta magna en el futuro.

PALABRAS CLAVE: Aceleración social, constitucionalismo, proceso constituyente, Chile, convención constitucional, desincronización de la democracia, participación deliberativa.

The Accelerated Participatory Program of the Chilean Constitutional Process of 2022

ABSTRACT

Chilean politics is at a new crossroads after the proposals for a new constitution written through democratic mechanisms were rejected on two occasions. It has become necessary to find explanations and new alternatives for the matter. Recent contributions from theories of social acceleration show that the making of constitutions in democratic contexts are slow artifacts, which tend to be out of sync with the high speed demonstrated by the pace of contemporary social change. In order to empirically approach this condition in the Chilean case, a documentary analysis of digital archives of the constitutional convention related to the conformation and implementation of the deliberative participation program of the process was used. The results indicate that the one-year term imposed by the constituted power ended up subjecting citizen and representative deliberations to a frenetic pace, making

* Licenciado en Sociología y magíster (c) Ciencia Política, Universidad de Chile. Asistente de investigación, Núcleo Milenio Desigualdades y Oportunidades Digitales.

✉ nicolas.tobar@ug.uchile.cl

Recibido mayo 2025 / Aceptado noviembre 2025.

Disponibile en: www.economiaypolitica.cl

it incompatible with the emergence of massive and reflective dialogues necessary to nurture the legitimacy of the process. Consequently, it is suggested that politics should navigate new alternatives of long duration that manage to respect the slowness of any formation process of a country project by means of a magna carta in the future.

KEYWORDS: Social acceleration, constitutionalism, constituent process, Chile, constitutional convention, desynchronization of democracy, deliberative participation.

Introducción

A tres años del proceso constituyente chileno de 2022, ha pasado suficiente tiempo para reflexionar acerca de los determinantes del amplio rechazo (62 %) en las urnas de la propuesta de borrador constitucional. Las razones que explican el mal desenvolvimiento del proceso son complejas y multicausales. Es de común encuentro la opinión que concluye que se debe abrir la mirada a la mayor cantidad de perspectivas posibles si se quiere dar con evidencia contundente para comprender lo que pasó en torno al proceso (Verdugo y García-Huidobro 2024).

A pesar de lo anterior, una buena parte de las lecturas que más atención han recibido para señalar lo que falló en el proceso se limitan a criticar la introducción de defensas corporativas particularistas-identitarias en el borrador (Peña 2021, Svensson 2022), a reconocer una errada interpretación de los anhelos de la población por parte del texto constitucional (Frei *et al.* 2024), o derechamente a señalar las torpezas e incapacidades “performáticas” y la falta de experiencia de los constituyentes para llevar a cabo su labor (Garín 2022, Titelman 2022, Rozas-Burgueño 2024). Estas lecturas tienen en común una descarga de las culpas del fracaso constitucional al desempeño de los representantes electos. Si bien no se puede negar que este elemento tuvo un peso decisivo en el resultado, es insuficiente en tanto no logra entrever la condena estructural a la que el proceso estaba atado.

Como respuesta, se han levantado contribuciones que señalan el peso que tuvo el diseño institucional del órgano redactor en el mal desenvolvimiento del proceso. Expertos en el área electoral señalan que la incongruencia entre el voto voluntario del plebiscito de entrada y el voto obligatorio del plebiscito de salida habría provocado un desajuste

entre la población representada por los constituyentes y la que rechazó la Constitución (Palestini y Medel 2025), o bien que la posibilidad de postular al cargo a través de listas de independientes y las cuotas por pueblos indígenas habrían sobrerrepresentado a grupos de intereses minoritarios y, a su vez, habrían entregado pocos incentivos para lograr consensos amplios en las discusiones con la política tradicional (Larraín *et al.* 2024, Escudero 2024). Estudiosos de la negociación política señalan que medidas como la extensión indefinida del trabajo de las comisiones temáticas, o como las reglas de votación interna sin enmiendas parciales, habrían provocado un déficit en las dinámicas de negociación y deliberación interna entre la diversa composición de constituyentes (Ginsburg y Álvarez 2024).

Los aportes en torno a los incentivos institucionales permiten dar cuenta de que los representantes en el proceso no solo tenían pocas atribuciones para el cargo, sino que también fueron productos de reglas y mecanismos disfuncionales que favorecían actitudes personalistas y de baja orientación al consenso. Sin embargo, cuesta captar, desde esta perspectiva interna al órgano, los motivos por los que decaen los niveles de apoyo e identificación del proceso con la sociedad a lo largo de su despliegue.

Considerando este hecho, recientemente ha surgido en la literatura la distinción entre explicaciones de “primer” y “segundo” orden al rechazo a la nueva Constitución. Las explicaciones de primer orden tienen que ver —como su nombre lo indica— con aquellas que involucran directamente los contenidos del borrador como motivo de la desafección ciudadana con la propuesta, entre ellas, la desconfianza mayoritaria a la plurinacionalidad que promovía el texto (Disi Pavlic 2024). Los argumentos de segundo orden enfatizan variables de carácter contextual a nivel país, que son relativamente ajenas al borrador mismo, como motivos que alimentaron el descontento. Se baraja entre este tipo de análisis que, durante el proceso, los ciudadanos homologaron el plebiscito a un voto de evaluación a la gestión del gobierno entrante de Gabriel Boric (González-Ocantos y Meléndez 2024), el cual, producto de una sensación generalizada de inseguridad, presentaba bajos niveles de aprobación (Berg Bilbao y Navia 2025).

Aunque la evidencia empírica se inclina a favor de estas hipótesis, la distinción en cuestión se centra en el borrador o en la dinámica

social que ocurre fuera del órgano constituyente. En cambio, una de las razones centrales que motivó este proceso era el procedimiento participativo que suponía (Heiss 2020). Lo cierto es que la oportunidad de redactar una nueva Constitución no fue conferida solamente en torno a una discusión técnica-jurídica sobre las facultades de los órganos del Estado, ni como un programa de un gobierno determinado, sino a partir de un proyecto de democratización de la sociedad chilena en su conjunto (Gargarella 2020, Garretón 2020). En ese momento, se instaló una narrativa en la opinión pública a nivel país que demandaba una integración a la ciudadanía en la toma de decisiones de las normas incorporadas en la nueva Constitución para legitimar la instancia. Si uno de los cuestionamientos del modelo instaurado en la Constitución de 1980 era la neutralización de la sociedad civil en la política, y su origen en un régimen autoritario, escribir una nueva Constitución traía consigo la oportunidad de legitimar sus normas a través de la participación deliberativa de la ciudadanía en su proceso de redacción (Atria 2013).

Al respecto, los comentarios de Figueroa Rubio (2023), como el trabajo de Gonzalo Delamaza (2025), demuestran que la convención propuso un programa de participación que combinó innovaciones valiosas y de altos niveles de transparencia y devolución para solventar su legitimidad deliberativa, pero que, de todas maneras, sufrió deficiencias de implementación de sus mecanismos y de sincronización de sus secuencias. Si bien se promovió una apertura inédita hacia la ciudadanía, la falta de articulación entre los insumos participativos y la deliberación sustantiva del órgano limitó su eficacia representativa y su impacto en la legitimidad del proceso.

Uno de los elementos a tomar en cuenta para entender los motivos de esta torpe implementación del programa de participación tiene que ver con el plazo de nueve meses, prorrogables a tres meses más, que tuvo el proceso para ejecutar todas sus pretensiones. Heiss y Suárez-Cao (2024) coinciden con Negretto y Soto (2022) al señalar que si bien en términos comparativos el tiempo que se dictaminó como acuerdo legislativo para terminar con la redacción de la nueva Constitución aparenta ser razonable, su naturaleza estrecha e inflexible añadió una cuota de complejidad a las discusiones, en cuanto la convención se autoconcibió como responsable de desplegar un mensaje claro de altos

niveles de transparencia y apertura que requería dilatar las discusiones y procedimientos de redacción.

Aunque estos comentarios no dejan de ser ciertos, evidencian la tensión de la temporalidad del proceso participativo desde un punto de vista politológico que enfatiza las fuentes institucionales del problema. Sin embargo, evaden el efecto que tienen las condiciones aceleradas que caracterizan a las sociedades de hoy sobre los plazos, ritmos y secuencias de las dinámicas institucionales. Como respuesta, el presente artículo busca profundizar en la tensión entre la estrecha temporalidad del plazo del órgano constitucional y su ambiciosa pretensión deliberativa, no mediante elementos contingentes del momento histórico en cuestión, sino en vínculo con los exponenciales niveles de dinamismo social que aquejan a las formaciones sociales contemporáneas. La tesis a defender es que la pretensión deliberativa de la convención no solo fue entorpecida por las contingencias del momento (pandemia, *fake news*, voto obligatorio, listas de independientes, etc.) o por las decisiones de los actores o los mecanismos mal diseñados en torno a la asamblea, sino también porque estuvo atada a tiempos comprimidos de deliberación que no permitieron conformar un debate lo suficientemente reflexivo y sustancial para las aceleradas condiciones en las que funcionan las sociedades de hoy.

Para hacer plausible esta tesis, se parte revisando los principales aportes de los pensadores sociales que han reflexionado sobre la temporalidad de la democracia y el constitucionalismo en contextos de modernidad tardía, para luego sugerir una bajada u operacionalización de estas teorías en las categorías convencionales de los estudios de los programas de participación deliberativa en procesos constituyentes. Dispuesta esta discusión, y para sustentar empíricamente la tesis antes descrita, se estudian los hechos y discursos que marcaron los procesos de conformación, planificación, implementación y sistematización del programa de participación deliberativa del proceso constituyente chileno a través de un análisis cualitativo de los documentos oficiales de la Convención Constitucional. Finalmente, se despliegan los resultados de este análisis y sugerencias para el futuro tratamiento de la cuestión constituyente en Chile.

Aceleración, democracia y constitucionalismo

La crisis que sufren las democracias liberales occidentales se ha tematizado intensamente. Sin embargo, son escasos los enfoques que enfatizan la velocidad de los ritmos y secuencias de la deliberación democrática, junto con los problemas que trae esta condición. El proceso constituyente chileno de 2022 puede abordarse en los marcos que los teóricos del tiempo llaman “desincronización política”, una tendencia general de esta época en que la democracia se ha vuelto incapaz de seguirle la pauta a un mundo acelerado y cambiante debido a la lentitud que la caracteriza.

Hartmut Rosa (2013) sugiere que a la sociedad moderna le sigue un imperativo estructural conocido como “estabilización dinámica”. Consiste en la necesidad que tienen las instituciones y sistemas de crecer, innovar y aumentar la velocidad de sus actividades con el único fin de reproducir y conservar sus extensiones. La constante aceleración de actividades en las sociedades modernas provoca que el presente se contraiga. En los tiempos que corren, las pautas, modas sociales y valores vigentes lo son por cada vez menos tiempo. Uno de los problemas que ha generado esta condición es que la democracia, en tanto requiere de una escucha activa y una comunicación secuencial, necesita de largos tiempos de deliberación para tomar decisiones, mientras el mundo le exige que las tome con mayor instantaneidad. De esta manera, se produce una desincronización: el sistema político comienza a operar a ritmos distintos de la alta velocidad del resto de esferas sociales, lo que produce una pérdida de control de las pautas de cambio social y un déficit de legitimidad de las instituciones políticas. Así es como Rosa (2020) logra entablar dos críticas a nuestra democracia contemporánea. Por un lado, una crítica funcional, en tanto el sistema político no logra la pretensión de gobernabilidad de la sociedad para la que fue creada y, por otro lado, una crítica ética, en tanto se ve frustrada la promesa moderna de construir un horizonte colectivo mediante la deliberación racional que permite la democracia.

Para los principios constitucionales que asume la democracia liberal las consecuencias son aún más graves. Los clásicos del constitucionalismo moderno, como Locke y Montesquieu, entendían que las constituciones debían gozar de una alta validez política para generar un orden de largo plazo que estabilizara las condiciones de operación del Estado. En ese sentido, las constituciones serían “sobreproyectivas” (regulan a largo

plazo una comunidad política) y “sobreconsumidoras” de tiempo (para predecir el futuro de buena forma deben elaborarse a ritmo lento). Con la contracción del presente, que propaga la estabilización dinámica, la validez de las constituciones arriesgan comprimirse también: si la velocidad de cambio de los valores de una sociedad aumenta, entonces, los principios cristalizados en una Constitución “del pasado” comenzarían a quedar obsoletos en el presente con mayor regularidad (Scheuerman 2004). Para evitar este riesgo de desincronización, la respuesta sería disminuir el tiempo que duran las constituciones. Las tendencias y contrastes de la historia política reciente confirman este hecho: si en el siglo XX las constituciones tenían una esperanza de vida promedio de alrededor de 17 años, en el siglo XXI esta se ha reducido a unos 12 años aproximadamente (Elkins *et al.* 2009).

Los procesos de aceleración a los que está sometida la sociedad, además de comprimir el presente, provocan que hoy tengamos sociedades cada vez más complejas y plurales, lo que añade grandes magnitudes de información al debate público que resultan a veces indescifrables (Han 2023, Innerarity 2018). El estado entrópico de la opinión pública contemporánea provoca que a los representantes políticos les cueste cada vez más comprender los verdaderos deseos de la ciudadanía. Una de las estrategias por las que se ha optado para enfrentar esta condición es el aumento del uso de mecanismos participativos durante los procesos constituyentes. El supuesto indica que generar mayores instancias de diálogo entre los encargados de la redacción y la ciudadanía extendería la validez de las normas constitucionales, en tanto, en teoría, habría mayor capacidad de entendimiento con la voluntad del demos (Landemore 2020). Pero esto ralentiza la toma de decisiones. No hay dudas de que es más rápido escribir una Constitución entre comisiones cerradas que convocando a millones de personas a dialogar sobre ella.

Esta tendencia a la participación también aumenta los plazos de redacción constitucional y, con ello, se hace latente el riesgo de obsolescencia. La aceleración del cambio social exige decisiones instantáneas, por lo que si se extiende más de la cuenta la distancia entre el momento en que se origina el proceso constituyente y su fecha de término, es más probable que los anhelos de la comunidad del presente se desajusten con respecto a los del pasado.

La evidencia comparada muestra que los procesos constituyentes con mecanismos participativos extensos suelen requerir entre 24 y 36 meses para su redacción (como en Sudáfrica, 1994-1996, o Nepal, 2006-2008). A su vez, el análisis cuantitativo global indica que la vida útil promedio de las constituciones modernas es de 19 años, aunque los procesos apresurados y no participativos tienden a mostrar mayores tasas de reemplazo (Elkins *et al.* 2009). En cambio, las redacciones exprés (menos de 12 meses y sin participación ciudadana) suelen durar, en promedio, menos de 10 años antes de su reemplazo. Brandt *et al.* (2011) documentan cómo fases largas de educación cívica, deliberación y redacción técnica fueron decisivas para el éxito de procesos en África y Asia, mientras que constituciones escritas velozmente “entre cuatro paredes” muestran mayores tasas de enmienda y reemplazo.

Sin embargo, un horizonte demasiado prolongado no garantiza automáticamente la estabilidad ni la legitimidad. La saturación informativa puede fragmentar a la ciudadanía o dar lugar a iniciativas disonantes (Urbinati 2014). Incluso Islandia, con un enfoque ultraparticipativo en 2011, no logró sostener su marcador constituyente. Por ello, el desafío en contextos democráticos con riesgos de obsolescencia constitucional es diseñar plazos que equilibren la profundidad deliberativa con la agilidad institucional (Blokker 2018).

En Chile, las primeras constituciones estables de 1833 y 1925 se escribieron en menos de seis meses mediante comisiones cerradas y no participativas. Sin embargo, para el contexto de 2022, el plazo de un año que se le confirió a la convención para desplegar un programa participativo le hizo navegar una disyuntiva desequilibrante. Este organismo debía ser consecuente con la demanda de participación que se conformó en el estallido social, pero iba a requerir de largo tiempo para cumplir con estos pronósticos, en medio de un plazo restrictivo de un año y un clima de transformación que lentamente se iba difuminando.

El tiempo en la participación deliberativa constituyente

Los dilemas del constitucionalismo liberal, en una época que revela su riesgosa obsolescencia, se pueden reducir a tres dimensiones que responden a sus fuentes de legitimidad: sus aspectos procedimentales,

normativos y estructurales. La legitimidad procedimental refiere al grado de participación de diversos actores sociales en el proceso de redacción de las normas constitucionales; la legitimidad normativa al grado de validación y pertinencia que alcanza el contenido de las normas constitucionales con respecto a su soberano, y la legitimidad estructural a la capacidad de las normas de estabilizar y reproducir el orden social y jurídico que configuran en el futuro. Con el aumento de asuntos que regular y, por lo tanto, con el menor tiempo de discusión que se dispone para redactar normas constitucionales, se deben comprimir las instancias de participación ciudadana, lo que afecta negativamente a la cuestión procedimental. Y si las orientaciones de valor de la sociedad cambian frenéticamente, se vuelve difícil predecir qué es lo que será normativamente válido para el futuro, lo cual entorpece el grado de reconocimiento de los sujetos con las normas constitucionales. Por último, con condiciones de vida cada vez menos consistentes, la demanda por cambios jurídicos y políticos también aumenta, lo que provoca un aumento en la necesidad de cambiar las constituciones, en desmedro de su legitimidad estructural (Tobar Jorquera 2023).

Este estudio se centra en la legitimidad procedimental del proceso constituyente chileno (aunque las otras dos tipologías también se desenvuelven de forma secundaria en el desarrollo de la investigación), pues la tensión está en el desafío de ofrecer un borrador de nueva Constitución y, en paralelo, llevar a cabo mecanismos participativos amplios en un plazo de 12 meses, con un contexto tardomoderno acelerado que cada vez dificulta más la deliberación lenta y racional. Con esto, no se quiere afirmar que sea la fuente procedimental la única que sostuvo la legitimidad del proceso, sino que es de las que más merece examinación debido a la tensión antes discutida.

La literatura en torno al estudio de los programas de participación ciudadana en procesos constituyentes coincide en que los cambios constitucionales resultan democráticos y justos siempre y cuando tengan plazos ajustados tanto para la conformación del reglamento de los mecanismos institucionales de participación como para la aplicación y procesamiento de los resultados de la participación. Los plazos, ritmos y secuencias deben ser suficientes como para llevar a cabo deliberaciones ciudadanas que permitan contrastar posiciones, llegar a consensos y

planificar correctamente la sistematización de la información resultante de los encuentros participativos. De no ser planificados, ni tengan los tiempos suficientes de discusión, la participación deliberativa podría perder incidencia, o incluso llegar a ser un mero hecho simbólico, sin la capacidad adecuada de consolidar la legitimidad procedimental del proceso. A esto se suma el hecho de que la presentación de insumos o *inputs* levantados por los procesos de participación deben sincronizarse con las etapas de toma de decisiones entre los representantes, pues si llegan antes de haberse conformado en un periodo tardío de la deliberación o cuando los acuerdos del sistema político ya están zanjados, pueden no ser considerados por no ajustarse a las condiciones del debate en curso (Welp y Soto 2019).

Si se observa en bruto, los recientes procesos constituyentes de América Latina tuvieron un plazo de funcionamiento mayor al que le fue permitido a la convención constitucional chilena de 2021-2022. El órgano constituyente que redactó la Constitución en Brasil (1987-1988) operó durante 18 meses aproximadamente, mientras que en Bolivia (2008-2009) se prolongó por 16 meses aproximadamente. El proceso colombiano de 1999, sumando la etapa participativa y la deliberativa, duró más de dos años. Mientras que el proceso instaurado por la presidenta Bachelet en 2015 se planificó para durar casi cuatro años, y fue descartado cuando llevaba poco menos de tres años en despliegue. El caso ecuatoriano de 2008 es una excepción a la regla, pues operó por menos de 8 meses, producto de la intervención autoritaria del Poder Ejecutivo, que reprimió la participación de los movimientos sociales e indigenistas para “acelerar” la redacción de la Constitución con normas inclinadas a favor del gobierno de Rafael Correa (Becker 2011).

El plazo de 12 meses que se le confirió al caso chileno de 2021-2022 es de los más cortos entre los procesos constituyentes que han ocurrido en América Latina en las últimas décadas. De todos modos, este plazo está dentro de los rangos razonables de la experiencia comparada en el mundo (Negretto y Soto 2022). El punto es que, tomando en cuenta las condiciones aceleradas tardomodernas en las que se situaba la sociedad chilena, sumadas a la coyuntura refundacional de la que debía hacerse cargo el órgano constituyente, las probabilidades de verse acelerado el proceso de deliberación participativa eran altas. Aunque, con ello, surgen dos preguntas que los datos pueden responder: ¿Será que los

procesos constituyentes requieren de más tiempo para instalar una Constitución legítima o será que, en realidad, las condiciones sociales de hoy los han vuelto un artefacto obsoleto? ¿Es determinante el tiempo que demoran los procesos constituyentes al momento de instalar una Constitución legítima en contextos democráticos?

Metodología

La investigación cualitativa en cuestión lleva a cabo una recopilación de documentos digitales oficiales de la Convención Constitucional chilena que se ven sometidos a distintas técnicas de análisis. Los hallazgos de las técnicas son triangulados, de modo que se puedan complementar los alcances de cada uno bajo un mismo hilo narrativo que comprenda la cronología de sucesos y discusiones en torno al programa de participación deliberativa del proceso constituyente. El proceso de análisis se realizó secuencialmente, o sea, que se separó por etapas en vez de llevar a cabo las técnicas consideradas de forma paralela (Hesse-Biber 2010). En este caso, se dividió el estudio en tres etapas.

En primer lugar, se sometió a un análisis temático el reglamento oficial del programa de participación de la convención, denominado *Reglamento de mecanismos, orgánica y metodologías de participación y educación popular constituyente*. Se distinguieron los criterios normativos que contemplaba explícitamente el documento para llevar a cabo el programa de participación, así como la estructura organizacional y la metodología de implementación y sistematización de los mecanismos que consideraba para llevarlos a cabo.

En segundo lugar, se recolectaron todos los cronogramas del programa de participación de la Convención Constitucional y las actas de sesiones plenarias para recabar detalles de los procesos de planificación e implementación de los mecanismos dispuestos en el reglamento de participación antes mencionado. Los documentos recolectados sirvieron como punto de apoyo para sistematizar, en una base de datos, todos los cambios en las planificaciones de los mecanismos participativos indicados en el reglamento, como eventos relacionados a este proceso. Los mecanismos que consideró el reglamento y que se sistematizaron en este estudio son los siguientes:

- La “iniciativa popular de norma” es un mecanismo vinculante mediante el cual un grupo ciudadano puede presentar una propuesta de norma a discutir por la Convención Constitucional para su posible incorporación en la nueva Constitución. El requisito es conseguir 15.000 firmas de personas naturales para que entre a discusión. Las propuestas se recopilan y habilitan para recibir firmas en una plataforma digital de la convención.
- Los “encuentros autoconvocados” son instancias de diálogo presencial entre un grupo de personas para deliberar sobre asuntos constituyentes por iniciativa propia.
- El “plebiscito intermedio dirimente” es una instancia de sufragio universal obligatoria, en la que las normas constitucionales que se hayan votado en el pleno y no hayan logrado el quórum requerido para su aprobación (dos tercios) se sometan a decisión popular vía mayoría simple. Para su implementación, primero, se requería aprobación del Congreso, lo que fue blanco de críticas de los constituyentes de derecha.
- Las “audiencias públicas” son instancias de recepción de propuestas, experiencias y testimonios de personas y organizaciones respecto a asuntos de interés del pleno general y las comisiones temáticas.
- La “jornada nacional de deliberación” es una instancia de discusión popular abierta que se desarrolla en todo el territorio chileno, en un día feriado y de forma simultánea al periodo de votación de las últimas normas constitucionales en el pleno.
- Los “foros deliberativos” son encuentros de discusión entre participantes elegidos aleatoriamente: a partir de una pauta de discusión preelaborada se eligen al azar, aunque con criterios de representatividad, a personas de la población chilena para que discutan sobre asuntos constitucionales. Los resultados se incorporan a la deliberación de la Convención Constitucional.
- Los “cabildos comunales” son instancias de diálogo y deliberación abierta sobre temas constitucionales, convocados por la convención, en conjunto con otras organizaciones con las que establece convenios (municipalidades, gobernaciones, fundaciones, universidades, entre otras).

- Las “oficinas territoriales constituyentes” son establecimientos físicos de diversas instituciones con las que la convención establece convenios para usar sus dependencias. De esta manera, facilita el acceso de la población a información sobre el proceso constituyente, así como también se reciben sus inquietudes y solicitudes.
- La “semana territorial” son siete días seguidos reservados al mes para que los constituyentes promuevan y participen en actividades territoriales orientadas a la rendición de cuentas y la difusión de la labor de la Convención Constitucional.
- La “cuenta popular constituyente” es la obligación de los constituyentes de tener encuentros periódicos con sus respectivos distritos para dar cuenta del avance del trabajo de la convención, además de recibir retroalimentación y aportes de la ciudadanía. Se realizan en conjunto con las semanas territoriales¹.

En tercer lugar, se revisaron los boletines de todas las sesiones plenarias (transcripciones literales de las discusiones), que tuvieron como objeto de discusión asuntos relacionados con el programa de participación deliberativa, así como iniciativas, informes, acuerdos y oficios que tuvieran que ver con el proceso de participación popular. Los documentos se sometieron a un análisis de discurso que revelara las estrategias y posiciones políticas detrás de las intervenciones de los constituyentes y sus agrupaciones políticas para lidiar con los plazos y secuencias preconcebidas del proceso, distinguiendo los intereses y relaciones de poder que operaron dentro de la convención (Flick 2014).

Las sesiones en las que se discutió sobre el programa de participación y, por lo tanto, de las que provienen los documentos, son la número: 19, 20, 21, 26, 28, 29, 30, 36, 37, 39, 42, 43, 45, 46, 48, 67, 72, 75 y 105. La muestra de los documentos es no probabilística y a conveniencia, pues el criterio de inclusión reside en la coherencia interna de los archivos para armar un relato histórico sobre cómo ocurrieron los eventos a analizar (Grant 2018). Todos los documentos se obtuvieron en el sitio web oficial de la Convención Constitucional².

¹ El reglamento también contaba con una “consulta indígena” como mecanismo de participación, que luego se trató en un reglamento aparte para su implementación. Debido a esta particularidad, se excluyó del análisis.

² www.chileconvencion.cl. A septiembre de 2025, los archivos se encuentran en el apartado “Documentos” del sitio web.

Hallazgos

Los resultados se dividieron en tres apartados, que se corresponden con las secuencias que contemplan los programas de participación deliberativa: primera, conformación del reglamento; segunda, planificación de sus mecanismos, y tercera, implementación y sistematización de los resultados. La presentación de los hallazgos sigue un orden lineal, lo que permite leer esta sección como una especie de crónica de cómo se realizó el proceso.

Una conformación maximalista del programa de participación

La convención comenzó a funcionar el 15 de noviembre de 2021. Recién un mes y medio después, el 28 de agosto de 2021, la Comisión Transitoria de Participación Popular y Equidad Territorial entregó una primera propuesta del reglamento de participación a la mesa directiva. El documento contiene los primeros apartados de principios, órganos y disposiciones generales del programa de participación. Los mecanismos aún no se habían detallado en profundidad.

El viernes 10 de septiembre de 2021, durante la sesión plenaria 19, se discutió este proyecto. Entre las intervenciones de los constituyentes se halló un consenso transversal en lo importante que era definir con claridad los procesos de sistematización y trazabilidad de los resultados para lograr incidencia de los mecanismos participativos. Incluso se dejaron ver intervenciones que, implícitamente, reconocían los riesgos de obsolescencia de las decisiones de los representantes y la necesidad de desplegar mecanismos participativos para amortiguarlos:

La historia se ha acelerado a velocidades insospechadas, y la sociedad cambia a saltos en direcciones inesperadas, con pasmosa flexibilidad. La convención y la Constitución deben contar con un set de mecanismos de participación que le permitan incidir de manera consultiva y vinculante a la gente, que le permitan decidir en su comuna y frente al municipio, el barrio y medio ambiente en el que quiera vivir. (Jorge Baradit, Colectivo Socialista)

Para ser coherentes con esta pretensión de autonomía y masividad, se notó entre los representantes una preocupación por acoplar los tiempos de implementación y sistematización de los mecanismos

participativos con la deliberación de normas constitucionales. Se trata de una manifestación explícita de los constituyentes de sincronizar la toma de decisiones interna de la convención con la naturaleza de las secuencias y etapas de cada mecanismo participativo:

Falta elaborar un calendario de participación compatible con los tiempos de la organización social, del avance del debate en las comisiones y de la necesaria sistematización y devolución de los resultados, y que garantice, por cierto, una implementación correcta, efectiva e incidentes de estos mecanismos, para que la participación no quede en lo simbólico. (Constanza Schonhaut, Frente Amplio)

En general, cuando solamente se plantea que la Secretaría Técnica de Participación Popular será la encargada de establecer las pautas y metodologías de sistematización de los encuentros autoconvocados, sin hacer mención alguna de cómo se relacionaría esta sistematización con los órganos de la convención durante el debate constitucional, el ejercicio participativo autoconvocado corre el riesgo de quedar obsoleto, desfasado y sin incidencias. (Yarela Gómez, independiente electa por la lista del Frente Amplio)

A partir de este punto, comenzaron a manifestarse disensos entre los constituyentes de Vamos por Chile y algunos de Independientes No Neutrales con el resto de los constituyentes. Estos grupos señalaron que si se promovía un proyecto participativo muy ambicioso, que difícilmente podría ser cumplido en plenitud, dados los recursos temporales de la convención, la población chilena generaría falsas expectativas de su incidencia en el texto final, que terminarían por quebrar la legitimidad de la nueva Constitución. A modo de respuesta, algunos constituyentes de izquierda aseguraron que las expectativas ciudadanas sobre una participación profunda en el proceso constituyente ya estaban latentes y, por lo tanto, la única opción legítima era hacerse cargo de ella con mecanismos vinculantes y masivos. Esta escisión de posiciones marcaría lo que luego fueron las discusiones en torno al diseño de los mecanismos de participación.

En la sesión plenaria 28 se presentó la propuesta definitiva del reglamento, que contenía 39 páginas y 91 artículos repartidos entre siete títulos. Este reglamento cumplía con los criterios regulativos que establece la literatura acerca de procesos de participación deliberativa:

consideraba un programa de educación popular bien detallado, procedimientos de sistematización y trazabilidad de los resultados, tiempos adecuados para el logro de incidencia de los mecanismos, autonomía frente al resto de poderes del Estado y una vocación de pluralización de grupos participantes y masividad de los encuentros participativos. Sin embargo, diversos análisis coinciden en caracterizar el diseño como excesivamente maximalista, sobredimensionado respecto de los recursos, plazos y capacidades reales de implementación (Delamaza 2025, Figueroa Rubio 2023).

El reglamento consideró 10 mecanismos de participación ciudadana paralelos a las discusiones entre constituyentes; entre ellos, algunos de tipo consultivo (presentaciones de expertos y grupos de la sociedad civil), otros deliberativos (discusiones ciudadanas en asambleas, sistematizadas en informes que apoyan la toma de decisiones), otros vinculantes (plebiscitos o iniciativas ciudadanas que toman decisiones en torno al debate de los representantes) y otros territoriales (salidas a terreno de los representantes a sus respectivos distritos electorales).

La propuesta, en este sentido, resultaba relativamente ambiciosa si se compara con la experiencia internacional, en cuanto estaba sobrecargada de procedimientos y alternativas de participación que, encima, requieren de enormes esfuerzos logísticos para ser desplegados (Heiss y Suárez-Cao 2024). El riesgo de varias de estas alternativas de verse reducidas a “letra muerta” era inminente. Para lo contrario, iba a ser fundamental una detenida planificación e implementación.

Cambios e improvisaciones frenéticas en la planificación del programa deliberativo

En la sesión plenaria 36 (28 de octubre de 2021), la mesa directiva presentó al pleno un cronograma de trabajo que planificaba todas las etapas restantes del proceso constituyente. El documento contemplaba 12 meses de funcionamiento en vez de nueve, aunque la prórroga que ofrecía el acuerdo aún no había sido solicitada. Aparentemente, desde un principio, los constituyentes asumieron que iba a ser imposible realizar sus objetivos en escasos nueve meses.

El proceso se dividió en tres etapas: 1) una etapa de conformación, donde se instala la convención y se redactan sus reglamentos y pautas de

funcionamiento (4 de julio de 2021-15 de octubre de 2021); 2) una etapa de debate constitucional, en la que comienzan a operar las comisiones temáticas y se confeccionan y aprueban las normas constitucionales (18 de octubre de 2021-22 de abril de 2022), y 3) la etapa de armonización, en la cual se afina el texto final (25 de abril de 2022-4 de julio de 2022).

Según este cronograma, la recepción de propuestas y firmas de iniciativas populares de normas se desarrollarían en paralelo a la primera parte de la etapa de debate constitucional, entre noviembre de 2021 y enero de 2022, de modo de recibir las propuestas de normas al momento de comenzar las votaciones de los artículos que ingresarían al borrador.

La jornada nacional de deliberación se estipuló para el 16 de enero, justo en el momento en que comenzaría la aprobación de las primeras normas constitucionales. La sincronización entre participación y toma de decisiones era clara para ambos mecanismos. Las audiencias públicas, tal como lo estaban haciendo, funcionarían durante todo el periodo de trabajo, pues el asesoramiento en las sesiones temáticas y de plenario estaría siempre presente. Los plebiscitos intermedios dirimientes, aunque aún no estaban aprobados en el Congreso, se planificaron para llevarse a cabo justo al inicio del periodo de armonización, cosa de facilitar la integración coherente de las normas que se aprobaran para el texto. En cambio, ante la condición de incertidumbre de los avances de la convención, no se especificaron los plazos de recepción de actas de encuentros autoconvocados y cabildos comunales, tampoco su sistematización. Lo mismo con la implementación de foros deliberativos. Para asegurar su correcta incidencia, las fechas de estos mecanismos se especificarían en un estado más avanzado de la discusión. Acerca de los mecanismos territoriales, hubo una planificación ordenada. Se proyectó una semana territorial al mes, como exigía el reglamento, tres salidas regionales y ya comenzaban a firmarse los primeros convenios con organismos municipales para levantar locales de difusión de información.

El cronograma estaba sobrecargado. Algunos constituyentes de centro y de derecha expresaron su preocupación de que la comprimida planificación terminara por acelerar los ritmos de las deliberaciones y negociaciones, que debían necesariamente ser pausadas y pensadas para llegar a acuerdos y lograr redactar un buen borrador a tiempo:

Los plazos son estrechos, tenemos un plazo que es fatal, no se va a renovar, y todo lo que impida nuestra deliberación afecta en definitiva al proceso constituyente (...) asumamos con el rigor que se requiere el respeto de los plazos, porque la calidad de nuestra deliberación y discusión puede verse afectada en la medida en que no conversemos con la calma y con el tiempo que merece tan delicada tarea. (Cristian Viera, Colectivo del Apruebo)

Corremos el riesgo de consumir anticipadamente los tiempos y de no contar con los espacios necesarios para debatir adecuada y democráticamente cada una de las propuestas, cada una de las enmiendas e indicaciones referidas a los contenidos de la nueva Constitución; lo que es, en definitiva, el mandato al que se nos ha obligado. (Harry Jürgensen, Vamos por Chile)

Aunque, para la fecha, se respiraba en la convención un clima de aprobación de la ciudadanía. El haber podido terminar el periodo de conformación e iniciar el de debate constitucional en los primeros cuatro meses de su funcionamiento se percibía como una fuente de aprobación ciudadana. Dentro de todo, la mayoría de la convención era autocomplaciente con la velocidad de su ritmo de trabajo:

[Citando a un vecino con el que habló] “Ah no pues, ya están en tierra derecha”, me dijo, “ya sé que empezaron a escribir ahora. Se demoraron en trazar la cancha pero ya están jugando”. Hay gente, está con nosotros. La gente está apoyando este momento constituyente. (Loreto Vidal, Pueblo Constituyente)

Los riesgos eran que nos demoráramos mucho tiempo en alcanzar los reglamentos que logramos votar. Afortunadamente, ese no fue un riesgo, porque lo hicimos en el tiempo estimado, incluso menos que el que se proyectó. (Beatriz Sánchez, independiente electa por la lista del Frente Amplio)

A partir de algunas sugerencias recibidas en la plenaria 37 del 3 de noviembre de 2021, la mesa directiva presentó una nueva propuesta de cronograma. Para la fecha, el levantamiento de la infraestructura digital en la que se iban a recibir las iniciativas populares de normas estaba retrasado. A esto se sumó que la conformación de las comisiones temáticas que escribirían las propuestas de normas para la Constitución se atrasó una semana más de lo esperado. Considerando esto, la nueva

planificación aplazó dos semanas el inicio del debate constitucional y la ejecución de los plebiscitos dirimientes.

Además, la segunda etapa de debate constitucional se dividió en dos periodos: primero, un periodo de instalación y participación (noviembre de 2021-febrero de 2022), en el que las comisiones temáticas confeccionarían las normas a votar en el pleno, considerando los insumos que iban a dejar los mecanismos participativos, y segundo, un periodo de votación plenaria de las normas constitucionales que se iban a incluir en el texto (febrero de 2022-abril de 2022).

En esta nueva planificación, se definió que un primer informe de sistematización de los mecanismos deliberativos sería presentado al pleno a mediados de enero, y un segundo informe a principios de marzo. La idea era que el primer informe permitiera refrescar de ideas a las comisiones para la confección de normas y que el segundo informe acompañara el periodo de deliberación para influir en las decisiones y votaciones de los artículos del borrador. Como contrapeso, se definió que en las semanas territoriales, que calzaban con la etapa de armonización, los constituyentes que integrarían la comisión encargada de escribir el borrador armonizado siguieran trabajando en esa tarea.

Casi dos meses después, el 29 de diciembre de 2021, se desarrolló la sesión plenaria 46, en la cual la mesa directiva propuso una nueva modificación al cronograma general. En este caso, se sometió a discusión: 1) trasladar las semanas territoriales de febrero, marzo y abril para mediados de mayo y finales de junio; 2) eliminar una salida regional; 3) aplazar en dos semanas la salida regional originalmente fijada para la semana del 28 de febrero, y 4) aplazar en una semana el inicio de las votaciones de informes de normas constitucionales, en conjunto con un aplazamiento de dos semanas del periodo de firmas de iniciativas populares de norma. Las tres primeras medidas se tomaron para descomprimir los tiempos de la etapa de armonización, dado el retraso que ya presentaba la deliberación de las normas que integrarían el borrador. La última medida se añadió con el fin de compensar el plazo en que la plataforma digital que recibiría las iniciativas populares no estuvo lista, y de que una mayor cantidad de normas lograra las firmas necesarias para ser votada en el pleno.

La jornada nacional de deliberación no fue implementada el 16 de enero, como se esperaba. El 18 de enero se despacharon a las comisiones

temáticas las iniciativas populares que lograron juntar las 15.000 firmas para que la convención las tematicice. En total, fueron 78 iniciativas. El 22 de marzo, la presidenta María Elisa Quinteros hizo efectiva la prórroga de tres meses de funcionamiento de la convención. A la fecha, la convención no había recibido ninguno de los dos informes de sistematización de mecanismos deliberativos que estaban programados.

El 25 de marzo, durante la sesión 75 de la Convención Constitucional, la mesa directiva sometió a votación un nuevo y último cronograma. En este caso, se aumentaron los plazos de confección de normas en las comisiones y de aprobación de las normas en el pleno, en desmedro de los tiempos de armonización del texto constitucional. Se trataba de un arreglo interno de los plazos del periodo de participación, para suplir el atraso provocado por la prórroga que se le dio a la implementación de las iniciativas. Entonces, ante las dificultades de implementación de la participación deliberativa, fue la etapa de “pulir” el producto constitucional la que sufrió las consecuencias.

En este cronograma, se planificó la jornada nacional de difusión, para finales de mayo, como el mecanismo que reemplazaría a la fallida jornada nacional de deliberación, aunque ya no con su carácter vinculante, debido a que la convención se encontraría en la etapa de armonización. En todo este proceso de planificación, ni los foros deliberativos ni los cabildos comunales se programaron. El Congreso no aprobó los plebiscitos dirimientes, por lo que no se implementaron.

La desincronización de la incidencia. Implementación y sistematización del programa

El resultado de la implementación de la mayoría de los mecanismos no fue el esperado. La tabla 1 muestra que prácticamente todos los mecanismos de participación sufrieron cambios improvisados, lo que alteró la incidencia de la voz ciudadana en las discusiones entre los constituyentes.

En primer lugar, hubo mecanismos que simplemente se descartaron en la planificación, como los foros deliberativos, o que se planificaron, pero nunca se llevaron a cabo, como los plebiscitos dirimientes. En segundo lugar, otros mecanismos tuvieron que cambiar su carácter incidente a uno de tipo divulgativo, pues se implementaron cuando ya

estaba definido el borrador de nueva Constitución, que es el caso de la jornada de deliberación nacional. En tercer lugar, hubo mecanismos que por las modificaciones de su fecha de implementación y sistematización se desincronizaron de la etapa de toma de decisiones en el debate constitucional (cabildos comunales y encuentros autoconvocados), al punto en que sus informes estuvieron listos meses después de haberse diluido la convención. De todas formas, se destaca que las iniciativas populares de norma y las audiencias públicas lograron relativamente bien su cometido, aunque la primera con sus debidas extensiones de plazos, que produjo externalidades para el desarrollo de la etapa de armonización. Además, el pleno de la convención rechazó varias de las iniciativas populares de norma más votadas por la ciudadanía, lo que da cuenta de una intención de participación que luego no se tradujo en incidencia, sino en mera consulta tramitativa, por falta de consideración del plenario de representantes (Claro 2022, Marusic 2022).

En ese sentido, hay un patrón: todos los mecanismos de carácter deliberativo, es decir, que implicaban un diálogo de fondo y no solo una agregación de voluntades o una salida a terreno de los representantes fueron los que perdieron por completo su incidencia. Y esto no es coincidencia: es el diálogo y la conversación la que siempre toma más tiempo de organización e implementación; pero también es la deliberación la que permite captar la complejidad de la voz de los gobernados. Se halla una “desincronización sectorizada” del sistema político, donde la incidencia de los elementos deliberativos de la convención es la que más sufre los tiempos comprimidos que tuvo a disposición.

Una vez desenvueltos estos resultados, la mirada retrospectiva en las últimas sesiones plenarias tuvo un dejo de autoflagelación entre los constituyentes progresistas que fueron llamados a liderar el proceso, y un tono autocomplaciente entre los constituyentes del ala derechista. Lo común a todas estas lecturas fue que el ritmo de trabajo resultó ser tan frenético que no hubo tiempo suficiente para formar un proceso que realmente se hiciera cargo de la pretensión participativa que se dispuso en un principio:

● TABLA 1. SÍNTESIS DE RESULTADOS DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN DELIBERATIVA CONSTITUYENTE

MECANISMO	PLANIFICACIÓN	IMPLEMENTACIÓN	SISTEMATIZACIÓN
Iniciativas populares de norma	1. 8 de noviembre 2021 al 6 de enero de 2022. 2. 8 de noviembre al 1 de febrero de 2022.	Retraso plataforma digital. Prórroga plazo de recepción de propuestas. Prórroga plazo de recepción de firmas. Llegaron 78 iniciativas a la convención.	Se presenta un informe de incidencia el 26 de mayo de 2022.
Encuentros autoconvocados	Recepción: enero y febrero de 2022. Presentación de informes. Históricos: 3-7 de enero de 2022. Actuales: 7-11 de marzo de 2022.	Se recibieron actas entre octubre de 2021 y enero de 2022.	Se presentó solo el informe de los EA históricos el 25 de marzo de 2022. El resto no fue sistematizado durante el proceso.
Cabildos comunales	Recepción: enero y febrero de 2022.	Se recibieron actas entre octubre de 2021 y enero de 2022.	Asigando a USACH días antes del final del proceso.
Plebiscito intermedio dirimente	1. 8 de mayo de 2022. 2. 25 de mayo de 2022.	No implementado.	No aplica.
Audiencias públicas	Durante todo el proceso.	Durante todo el proceso.	No aplica.
Jornada nacional de deliberación	16 de enero de 2022.	Modificado a jornada nacional de difusión, no incidente. Aplicado entre el 27 y 29 de mayo.	Asigando a USACH días antes del final del proceso.
Foros deliberativos	No planificado.	No implementado.	No sistematizado.
Oficinas territoriales constituyentes	No aplica.	Se realizaron cinco convenios, que incluyeron 33 municipalidades.	No aplica.
Semana territorial/ Cuenta popular constituyente	1. 8 semanas, una al mes. 2. 9 semanas, una al mes. 3. Cuatro semanas, entre noviembre de 2021 y enero de 2022; tres semanas, entre mayo y junio de 2022.	Cuatro semanas con cuenta popular, entre noviembre de 2021 y enero de 2022; tres semanas de difusión de borrador de nueva Constitución, entre mayo y junio de 2022 (restado a comisión de armonización).	No aplica.
Salida regional	1. Tres salidas regionales: 22 de noviembre de 2021, 7 de enero de 2022, 28 de febrero de 2022. 2. Dos salidas regionales: 22 de noviembre de 2021, 14-18 de marzo de 2022.	Región del Biobío el 22 de noviembre de 2021. Región de Antofagasta el 16 de mayo de 2022.	No aplica.

Fuente: elaboración propia a partir de documentos oficiales de la Convención Constitucional.

¿Cómo pasaron los meses que tenemos a nuestras espaldas? A una gran velocidad, productivamente, es verdad, pero a una gran velocidad. (Agustín Squella, Colectivo del Apruebo)

En el apuro con el que trabajamos en esta convención, como órgano no hemos logrado promover la “constituyencia” de la que hablamos tanto. (Natividad Llanquileo, Pueblo Constituyente)

La participación es el corazón de esta convención, pero late de prisa cuando los tiempos no alcanzan, cuando nos urge terminar, cuando estamos siempre corriendo para cumplir los plazos y cuando sabemos que otros procesos constituyentes tuvieron mucho más tiempo que nosotros. (Loreto Vallejos, Pueblo Constituyente)

El poco tiempo que tuvo la convención terminó por sepultar su trabajo. En las plenarias finales, la mayoría de los discursos de los constituyentes señaló los estrechos plazos entregados como el principal culpable de lo inacabado del proceso en términos de implementación del programa de participación deliberativa:

Lamentablemente, no lo logramos hacer, los tiempos no fueron propicios y por más que nos esforzamos, eso no se logró. Cuidémonos entre nosotros, tratemos de ser lo más empáticos que se pueda, bajemos la velocidad, no hagamos discursos que sean odiosos. (Loreto Vidal, Pueblo Constituyente)

Sin embargo, también hubo críticas a los maximalismos del programa de participación, por haberse desentendido de las condiciones temporales del proceso y de su principal objetivo: escribir una nueva Constitución.

A ver, qué ha faltado en este proceso: principio de realidad en los tiempos (...) ya parece chacota (...) Está bien que se cometan errores y que los vayamos arreglando por el camino, pero es importante también coordinar nuestros tiempos para realizar el trabajo en beneficio de la ciudadanía. (Ruth Hurtado, Vamos por Chile)

Esto es una participación ciudadana que es de cartón, que tiene letra chica o que en definitiva es una puesta en escena para decir que le cumplimos, pero en definitiva no le estamos cumpliendo (...) no digamos que va todo viento en popa o que está todo en orden, porque cuando uno cambia el cronograma es porque claramente no está cumpliendo los plazos. (Arturo Zúñiga, Vamos por Chile)

Sin un acuerdo tan claro con respecto a la evaluación de la temporalidad que se le brindó a la institucionalidad de la convención, lo cierto es que una vez rechazado el texto no fueron pocas las intervenciones de las autoridades del sistema político para señalar la imposibilidad de haber llevado el proceso correctamente con los ritmos de deliberación a los que se vieron enfrentados.

Conclusiones

El abogado constitucionalista Gonzalo García Pino (2024) señala que después de los dos procesos constituyentes fallidos, Chile se encuentra en un estado “postconstitucional”; esto es, un momento donde el país —producto de una sumatoria de procesos estructurales— ha ido abandonado el modelo liberal que rige desde 1925, sin instaurar ningún tipo de alternativa normativa para la nueva sociedad que se ha gestado en el tiempo. Producto de este vacío, es necesario fortalecer el juicio crítico en torno a las experiencias pasadas, para encontrar orientaciones sobre el modo de afrontar la crisis conjunta y permanente de hoy. En este artículo, se aportó a estas preocupaciones mediante el examen de la tensión entre los plazos y la implementación de mecanismos participativos que presentó el primer intento fallido de cambio constitucional.

La ilusión de llevar a cabo un programa masivo y excesivamente maximalista de participación ciudadana, en el proceso constituyente chileno, en el regulado e inflexible plazo de un año es un factor preponderante para entender los obstáculos con los que se estrelló la pretensión deliberativa de la convención. Si se entiende que dicha pretensión fue uno de los principales motivos por los que se convocó a escribir una nueva Constitución mediante una asamblea, una de las causas que explican la pérdida de legitimidad del texto tuvo que ver, en parte, con el diseño temporal de la institucionalidad del órgano que lo escribió.

En un mundo que cambia cada vez más rápido, donde las constituciones tienden a quedar obsoletas tempranamente, el ejercicio democrático requiere incrementar los tiempos de reflexión y deliberación para dibujar una hoja de ruta que se sienta abierta y transparente. Si bien esta relación entre participación y legitimidad constitucional no es mecánica ni causal, no deja de ser un elemento para discutir en

torno a la experiencia chilena de 2022. Un aprendizaje relevante de esta experiencia es que, para encontrar fuentes de orientación al “post-constitucionalismo” chileno, se necesita entender que será mediante un proceso lento, paulatino y de múltiples focos de discusión.

Puede que el excesivo énfasis que se le dio a la cuestión constitucional en tanto procedimiento formal, centralizado en representantes electos y planificado en tiempos poco flexibles, termine por ahogar las iniciativas espontáneas y renovadoras que surgieron en la sociedad civil por fuera de la convención, durante el estallido (Montero y Tobar Jorquera 2023). Si se suma la consideración de que Chile logró un récord al rechazar seguidamente dos propuestas de nueva Constitución, da para pensar si es mediante esta vía jurídica-estatal que se encontrarán salidas a la cuestión social que vive el país o si, en realidad, la Constitución y sus mecanismos participativos son artefactos medianamente obsoletos que se ven desbordados por la profundidad cultural de la crisis en Chile y, por lo tanto, el modo de canalizar este debate requiere de mecanismos que sean aún más exhaustivos y menos rígidos que la elaboración de una nueva Carta Magna. Futuras investigaciones en torno a los supuestos temporales del constitucionalismo deberán hacerse cargo de explorar alternativas a los desafíos que tiene la democracia chilena en estos momentos, así como a la transferibilidad de las lecciones del caso para los riesgos de obsolescencia del constitucionalismo a nivel global.

Asimismo, próximos estudios también requieren profundizar en las limitaciones evidentes que tienen estos hallazgos. Por un lado, se requiere de nuevas indagaciones que busquen entender los tropiezos de la pretensión deliberativa a partir de otros elementos, como el desajuste de preferencias entre la ciudadanía y los constituyentes, toda vez que aquellos insumos de apoyo mayoritario que provienen de los mecanismos que sí logran implementarse según lo estipulado por el reglamento (este es el caso de las IPN), no son considerados por los representantes. Por otro lado, se debe tomar en consideración el particular desenvolvimiento de la consulta indígena que, producto de no ser estrictamente parte del reglamento de participación ni de sus discusiones plenarias, no fue incluido en el análisis. Para finalizar, es necesario entablar un análisis sistemático que permita ponderar estos hallazgos con otras causas del déficit de legitimidad que sufrió el proceso, ya sean variables de segundo orden o contenidos del texto mismo.

BIBLIOGRAFÍA

- Atria, F. 2013. *La Constitución tramposa*. LOM Ediciones.
- Becker, M. 2011. Correa, Indigenous Movements, and the Writing of a New Constitution in Ecuador. *Latin American Perspectives* 38(1), 47-62. DOI: <https://doi.org/10.1177/0094582X10384209>.
- Berg Bilbao, S. y Navia, P. 2025. The Perception of Insecurity and Vote Choice in National Referendums: The Case of Chile in 2022. *Politics*. DOI: <https://doi.org/10.1177/02633957241313423>
- Blokker, P. (ed.). 2018. *Constitutional Acceleration within the European Union and Beyond*. Routledge.
- Brandt, M., Cottrell, J., Ghai, Y. y Regan, A. 2011. *Constitution-Making and Reform: Options for the Process*. Interpeace.
- Claro, H. 1 de abril de 2022. Las iniciativas populares que la Convención se negó a discutir. *El Dínamo*. Disponible en: <https://www.eldinamo.cl/politica/2022/04/01/las-iniciativas-populares-que-la-convencion-se-nego-a-discutir/>
- Delamaza, G. 2025. *Por un Chile diferente: participación popular en el proceso constituyente*. LOM Ediciones.
- Disi Pavlic, R. 2024. Indigenous Voices and Votes: Assessing the Dynamics of Indigenous Politics in Chile's Constitutional Referendum of 2022. *PS. Political Science & Politics* 57(2), 267-273. DOI: <https://doi.org/10.1017/S1049096523000872>
- Elkins, Z., Ginsburg, T. y Melton, J. 2009. *The Endurance of National Constitutions*. Cambridge University Press.
- Escudero, M. C. 2024. Institutional Resistance: The Case of the Chilean Convention 2021-22. *Global Constitutionalism* 13(1), 192-199. DOI: <https://doi.org/10.1017/S2045381723000291>
- Figueroa Rubio, P. 2023. The Failed Case of a Perfect Design? The Case of Chile's Constitution Making Process (2016-2022) (SSRN Scholarly Paper No. 4515945). *Social Science Research Network*. Disponible en: <https://papers.ssrn.com/abstract=4515945>
- Flick, U. (ed.). 2014. *The SAGE Handbook of Qualitative Data Analysis*. SAGE.
- Frei, R., Cordero, R., Lang, B., Rozas, J. y Rodríguez, J. P. 2024. Claims of Ownership, Claims of Dignity: Moral Narratives on the Right to Housing in Chile's Constitutional Referendum. *Journal of Language and Politics*. DOI: <https://doi.org/10.1075/jlp.24097.fre>
- García Pino, G. 2024. *Postconstitucionalismo chileno: una radiografía del estado actual de la constitución*. DER Ediciones, 1ª ed.
- Gargarella, R. 13 de febrero de 2020. Diez puntos sobre el cambio constitucional en Chile. *Revista de Frente*. Disponible en: <https://www.revistadefrente.cl/diez-puntos-sobre-el-cambio-constitucional-en-chile-por-roberto-gargarella/>
- Garín, R. 2022. *El fracaso. Como se incendió la convención*. Editorial Catalonia.
- Garretón, M. A. 2020. Por qué el proceso constituyente es "refundacional". *Revista Mensaje*.
- Ginsburg, T. y Álvarez, I. 2024. It's the Procedures, Stupid: The Success and Failures of Chile's Constitutional Convention. *Global Constitutionalism* 13(1), 182-191. DOI: <https://doi.org/10.1017/S2045381723000242>
- González-Ocantos, E. y Meléndez, C. 2024. Rethinking the Role of Issue-Voting in Referenda: Conjoint and Vote Choice Analyses of Preferences for

- Constitutional Change in Chile. *Comparative Politics* 56(2), 219-242. DOI: <https://doi.org/10.5129/001041523X16964369022295>
- Grant, A. 2018. *Doing Rxxcellent Social Research with Documents: Practical Examples and Guidance for Qualitative Researchers*. Routledge.
- Han, B. C. 2023. *Infocracia: la digitalización y la crisis de la democracia*. Taurus Ediciones.
- Heiss, C. 2020. *¿Por qué necesitamos una nueva constitución?* Editorial Aguilar.
- Heiss, C. y Suárez-Cao, J. 2024. Constitution-Making in the 21st Century: Lessons from the Chilean Process. *PS. Political Science & Politics* 57(2), 282-285. DOI: <https://doi.org/10.1017/S104909652300104X>
- Hesse-Biber, S. N. 2010. *Mixed Methods Research: Merging Theory with Practice*. Guilford Press.
- Innerarity, D. 2018. *Comprender la democracia*. Gedisa.
- Landemore, H. 2020. *Open Democracy: Reinventing Popular Rule for the Twenty-First Century*. Princeton University Press. DOI: <https://doi.org/10.2307/j.ctv10rcrzs>
- Larraín, G., Negretto, G. y Voigt, S. 2023. How Not to Write a Constitution: Lessons from Chile. *Public Choice* 194(3-4), 233-247. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11127-023-01046-z>
- Marusic, M. 29 de marzo de 2022. Pensiones en la Convención: iniciativa popular más votada "Con mi plata no" es rechazada en comisión y aprueban propuesta de No+AFP. *La Tercera*. Disponible en: <https://www.latercera.com/pulso/noticia/pensiones-en-la-convencion-iniciativa-popular-mas-votada-con-mi-plata-no-es-rechazada-en-comision-y-aprueban-propuesta-de-noafp/BGSVRERN25D5VHEITWMQLGCSVI/>
- Montero, D. y Tobar Jorquera, N. 2023. Nuestro récord en fracasos constitucionales: una oportunidad para repensar el orden social. *El Desconcierto*. Disponible en: <https://www.eldesconcierto.cl/opinion/2023/12/25/nuestro-record-en-fracasos-constitucionales-una-oportunidad-para-repensar-el-orden-social.html>
- Negretto, G. L. y Soto, F. 2022. ¿Cómo se debe regular un proceso constituyente democrático? Reflexiones a partir de la experiencia chilena. *Boletín Mexicano de Derecho Comparado* 55(163). DOI: <https://doi.org/10.22201/ijj.24484873e.2022.163.17494>
- Palestini, S. y Medel, R. M. 2025. The 'Withdrawn Citizen': Making Sense of the Failed Constitutional Process in Chile. *Bulletin of Latin American Research*, blar.70019. DOI: <https://doi.org/10.1111/blar.70019>
- Peña, C. 2021. *La política de la identidad: ¿el infierno son los otros?* Taurus, 1ª ed.
- Rosa, H. 2013. *Social Acceleration. A New Theory of Modernity*. Columbia University Press Books.
- Rosa, H. 2020. *Alienación y aceleración: hacia una teoría crítica de la temporalidad en la modernidad tardía*. Katz Editores.
- Rozas-Bugueño, J. 2024. Between Hope and Disaffection: The Chilean Constitution-Making Process and the Intermediation Crisis. *PS. Political Science & Politics* 57(2), 274-281. DOI: <https://doi.org/10.1017/S1049096523001130>
- Scheuerman, W. E. 2004. *Liberal Democracy and the Social Acceleration of Time*. JHU Press.
- Svensson, M. 6 de septiembre de 2022. Cómo la política identitaria corrompió el proceso constituyente. *CIPER Chile*. Disponible en: <https://www.ciperchile.cl/2022/09/06/politica-identitaria-y-proceso-constituyente/>

- Titelman, N. 2022. ¿Adónde fue a parar el apoyo al proceso constituyente chileno? *Revista Nueva Sociedad*. Disponible en: <https://lamiradasemanal.cl/adonde-fue-a-parar-el-apoyo-al-proceso-constituyente-chileno-por-noam-titelman/>
- Tobar Jorquera, N. 2023. Aceleración y constitucionalismo. Tres aproximaciones a la legitimidad temporal del proceso constituyente chileno. *Revista Temas Sociológicos* 32, 271–299. DOI: <https://doi.org/10.29344/07196458.32.3293>
- Urbinati, N. 2014. *Democracy Disfigured: Opinion, Truth, and the People*. Harvard University Press.
- Verdugo, S. y García-Huidobro, L. E. 2024. How Do Constitution-Making Processes Fail? The Case of Chile's Constitutional Convention (2021-22). *Global Constitutionalism* 13(1), 154-167. DOI: <https://doi.org/10.1017/S204538172300031X>
- Welp, Y. y Soto, F. 2019. Más allá de modas y cortinas de humo: la deliberación ciudadana en cambios constitucionales. *Revista Española de Ciencia Política*, 13-41. DOI: <https://doi.org/10.21308/recp.50.01>.